

LAS ESTRATEGIAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESPAÑOLES HACIA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES*

THE STRATEGIES OF SPANISH POLITICAL PARTIES TOWARDS SOCIAL ORGANIZATIONS

TANIA VERGE

Universidad de Sussex. Reino Unido
tverge@hotmail.com

RESUMEN

En este artículo se analizan las estrategias utilizadas por los tres partidos políticos españoles de ámbito estatal (PSOE, PP e IU) en relación con la sociedad civil organizada y su evolución en el período 1977-2004. Se demostrará que las estrategias de competición y cooptación cedieron paso a partir de los años noventa a distintas fórmulas de colaboración con las organizaciones sociales. Por un lado, esta última estrategia puede ser funcional a la movilización electoral y, por otro, facilita la obtención de los *inputs* necesarios para elaborar los programas electorales. Asimismo, permite a los partidos hacer creíble ante el electorado su compromiso con ciertas demandas sociales y recuperar cierta legitimidad pública. En contra de las tesis del *cartel party*, el acceso a la financiación pública resulta compatible con un nuevo acercamiento a la sociedad.

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Competición política, Desafección política, Movimientos sociales, Partido cartel, Sociedad civil.

ABSTRACT

This article analyses the strategies used by the three state-level Spanish political parties (Spanish Socialist Workers' Party, Popular Party and United Left) in relation to civil society and their evolution during the period 1977-2004. It will be shown that competition and co-optation were replaced by different collaboration mechanisms along the 1990s. On the one hand, collaboration might be functional to electoral mobilization and, on the other hand, it facilitates the obtaining of the necessary inputs to elaborate party manifestos. Furthermore, it reinforces parties' credibility before the electorate regarding their commitment to certain social demands. Against the cartel party thesis, access to public financing is compatible with a new rapprochement to society.

ADDITIONAL KEYWORDS

Cartel Party, Civil Society, Political Competition, Political Disaffection, Social Movements.

* Quisiera agradecer a todas las personas entrevistadas su inestimable colaboración y también a Abel Escribà-Folch por los comentarios realizados a una versión anterior de este texto.

INTRODUCCIÓN

Existe en la actualidad una viva discusión sobre el estadio presente de desarrollo organizativo de los partidos políticos (Gunther y Diamond, 2001). Mientras que para muchos autores sigue vigente el modelo *catch-all* de Kirchheimer (1966), otros autores han defendido la transición hacia un modelo *cartel* donde el partido ha abandonado todo interés por la sociedad y se ha desplazado hacia el Estado, penetrando sus propias estructuras (Mair, 1997). Este nuevo tipo de partido estaría interesado en limitar la competición política, excluyendo así a ciertos sectores del electorado cuyas reivindicaciones quedan al margen del *cartel*, y mostraría una permanente falta de receptividad a las demandas sociales. Estos hechos habrían generado un nivel creciente de frustración ciudadana y una predisposición a respaldar partidos anti-sistema (Katz y Mair, 1995: 24; Poguntke, 1996).

No obstante, el distanciamiento de la sociedad tiene un límite incluso para los defensores del *cartel party*. En el pasado, la comunicación formalizada con el electorado no resultaba fundamental, ya que los líderes de los partidos de masas podían interpretar con certeza cuáles eran los intereses de las clases a las que representaban. Esta estrategia se demuestra hoy poco útil frente a una sociedad más atomizada y con débil lealtad partidista. En cambio, las organizaciones sociales son grandes proveedoras de información y los partidos pueden aproximarse a ellas con el fin de obtener los *inputs* necesarios para elaborar sus programas electorales (Bartolini y Mair, 2001: 335). Para otros autores, este acercamiento obedece a la necesidad de recuperar cierta legitimidad pública. Es conocido que los partidos suelen ser las instituciones peor valoradas por los ciudadanos y que han visto debilitadas sus funciones representativas, entre ellas la capacidad para estructurar el voto, plasmándose en el incremento de la volatilidad y de la abstención (Gunther y Montero, 2001; Mair, 2005; Webb, 2002).

Los partidos no son actores estáticos, sino que disponen de un importante potencial de flexibilidad para adaptarse a los retos generados por la aparición de los nuevos movimientos sociales y por unos ciudadanos con mayores recursos cognitivos y con más predisposición a la participación en los asuntos públicos (Font, 2001: 16). Todo ello ha llevado a algunos autores a plantear que los partidos habrían hecho de la necesidad virtud, introduciendo reformas organizativas para (*re*)incorporar a la sociedad en la política, impulsando la militancia activa de sus bases o forjando nuevas relaciones con las organizaciones sociales (Koole, 1996; Yishai, 2001).

En el primer apartado analizaremos cómo los tres partidos españoles de ámbito estatal (PP, PSOE e IU) han reflexionado sobre la desafección y el descontento político de los ciudadanos, en especial en lo que se refiere al distanciamiento de los partidos¹.

¹ Estudiaremos el Partido Popular bajo las diferentes siglas con las que ha existido desde 1977, incluyendo entonces a su predecesora Alianza Popular. En cuanto a Izquierda Unida, dado que su aparición data de 1986, analizaremos para años anteriores el PCE.

En el segundo apartado se mostrarán las tres estrategias utilizadas por los partidos en relación con la sociedad civil organizada y su evolución en el período 1977-2004. A su vez, se reflexionará sobre los factores que han determinado el cambio de estrategia.

DESAFECCIÓN CIUDADANA Y PARTIDOS POLÍTICOS

La existencia de unas actitudes políticas de los ciudadanos bastante negativas hacia los partidos políticos se entendió, desde el PSOE, en un primer momento, como una característica inherente a la sociedad española que encajaría dentro del “antipartidismo cultural” en los términos definidos por Torcal *et al.* (2001): el no reconocimiento de la importancia de las funciones de los partidos sería fruto de la tradición cultural heredada del franquismo y de la todavía breve experiencia democrática de los españoles (PSOE, 1984: 85). A partir de 1990 apreciamos un cambio en el discurso cuando, sin reconocerse explícitamente la existencia de crisis alguna, se plantea de forma clara el distanciamiento entre partidos y ciudadanos, a raíz bien de la insatisfacción de ciertas demandas, como el ecologismo o el pacifismo, sobre todo entre los jóvenes y las clases medias, o bien por las deficientes instancias de participación del sistema representativo que provocarían el desplazamiento de los ciudadanos hacia organizaciones políticas no tradicionales (PSOE, 1990a).

En 1994, tras haber perdido la mayoría absoluta en el Congreso y haberse recortado enormemente la distancia que le separaba del principal partido de la oposición —el PP—, el PSOE redefine el “impulso democrático” como una “respuesta a la crisis de representación, de la política y de los partidos, a los fallos en el funcionamiento de las instituciones y a la falta de confianza de los ciudadanos en sus representantes” (PSOE, 1994a: 13). La deslegitimación y el descrédito de la vida política tendrían su origen en los escándalos de corrupción y de financiación irregular de los partidos, en la homogeneización de los programas políticos, en el déficit democrático de los partidos y en su alejamiento de sectores cada vez más numerosos de la sociedad. A estos hechos se atribuía el incremento de la abstención, la apatía, el crecimiento de partidos antisistema y la marginación de la izquierda. El PSOE considera entonces que la superación de la crisis y la “relegitimación” de los partidos pasan por responder a las nuevas demandas y por incorporar a la democracia una dimensión más participativa (PSOE, 1994a: 129-132).

Este discurso se desarrollará con mayor profundidad con la llegada en el año 2000 del nuevo equipo directivo (liderado por José L. Zapatero) al partido. Para superar el escepticismo que produce la política, los partidos deben ser “abiertos, transparentes, responsables ante sus miembros, pero sobre todo ante la sociedad, en relación directa y sincera con los ciudadanos, receptores de sus aspiraciones” (PSOE, 2001: 2). La siguiente reflexión ilustra la relación que establece el PSOE entre la participación ciudadana y la legitimidad de las decisiones públicas: “Hoy es más cierto que nunca, que una decisión política, tanto o más que por su contenido, ha de legitimarse por hacer a muchos partícipes de la misma, por su capacidad para generar consensos, [por] contar con la opinión de las organizaciones sociales” (PSOE, 2004: 20-22).

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, del pasado siglo XX, Alianza Popular (AP) mostraba su inquietud por “la frustración y desencanto general” que, según el partido, se respiraba en el país. La crisis económica y la falta de eficacia de los servicios públicos ponían en cuestión la legitimidad del sistema político (AP, 1979: 11). La desconfianza de los ciudadanos y el descrédito de las instituciones se debían a que el advenimiento de la democracia había interrumpido el desarrollo económico y social (AP, 1981: 57). En 1981 se adelanta ya una idea clave en el discurso *popular*: la eficacia como solución indiscutible para recuperar la legitimidad institucional (AP, 1981: 70). Y es precisamente la eficacia lo que se presenta como principal activo de AP ante su electorado (AP, 1986: 4).

A partir de 1990, el “refundado” Partido Popular atribuye el desprestigio de la política a los fenómenos de corrupción de personas vinculadas al PSOE y a la falta de respuesta a la misma. En 1993 lanzará una oferta de “regeneración democrática” que vincula, en cierta medida, la recuperación económica y la eficacia con la ética en la vida política (PP, 1993: 121-27). Una vez el PP accede al gobierno en 1996, las referencias al descontento de los ciudadanos desaparecen de su discurso. El partido considera que las demandas de los ciudadanos van encaminadas a la exigencia de un mejor funcionamiento de las instituciones a través de una mayor eficacia (PP, 1999a: 151). Asimismo, el PP ha considerado tradicionalmente que una mayor legitimidad institucional se obtiene con la disminución del papel del Estado en beneficio de los ciudadanos (PP, 1996: 168). No obstante, la participación ciudadana que el partido defiende está muy vinculada a la prestación de servicios sociales que aligeren la carga del Estado, ya que éste “no es capaz de hacerlo todo” (PP, 1993: 134).

En cuanto al Partido Comunista (PCE), a principios de los ochenta, el partido reconocía no haber prestado la atención necesaria a la construcción del partido de masas y asumía las deficiencias existentes en el funcionamiento de la organización como el insuficiente debate interno, la exigua relación entre la dirección y los cuadros, los cargos públicos y los militantes y, finalmente, la incapacidad para proyectar su acción hacia la sociedad (PCE, 1981: 11). Se achacaba, además, a los partidos la responsabilidad por su propio desprestigio al haber contribuido a “concebir una sociedad que anula la participación popular” (PCE, 1987: 32). De hecho, el PCE fundará Izquierda Unida en 1986, junto a otros pequeños partidos de izquierdas, como un proyecto político capaz de aglutinar las preferencias de una amplia base social que había dejado de sentirse representada por los partidos políticos tradicionales (IU, 1989: 11).

Para IU, la profesionalización de la política y el uso de un lenguaje político cada vez más técnico y ajeno a la cotidianeidad de los ciudadanos habrían alejado a estos últimos de la política (IU, 1990: 32). Asimismo, se reconoce la incapacidad de la izquierda de dar respuesta a nuevas demandas sociales (IU, 1990: 16). Para IU, la superación del distanciamiento de los ciudadanos con las instituciones no es posible sin la adopción de medidas que tengan por objetivo la democratización y el acercamiento de las instituciones al ciudadano y la ampliación de las fórmulas participativas, acercando la capacidad de decisión a la ciudadanía, desarrollando la sociedad civil y democratizando los propios

partidos (IU, 1997: 51). En IU se hablaba explícitamente de crisis de la representación: “La crisis de representación de los de abajo nos invita a sumar acuerdos de geometría variable en diferentes niveles de actuación: en lo social, en lo político, en lo institucional... IU debe ser uno de los nudos de una vasta red de organizaciones críticas contra el actual modelo dominante” (IU, 2004: 19).

De este modo, vemos que la preocupación por la desafección ciudadana ha sido mucho mayor en el PSOE y en IU que en el PP. Los primeros han reconocido en diferentes momentos la existencia de una crisis en la representación política y no han dudado en atribuir una parte de la responsabilidad de esta situación al funcionamiento de sus propias organizaciones. En cambio, para el PP, la crisis tiene otra envergadura y una solución distinta: instituciones y partidos se deslegitiman cuando no funcionan de manera eficaz, es decir, cuando no ofrecen buenos productos al electorado. No encontramos a lo largo del período estudiado en los documentos del PP referencias a los déficits participativos del sistema político o de los propios partidos.

De entre los diferentes síntomas de la desafección política, los partidos de izquierdas se han preocupado especialmente por la abstención. El PSOE ha mantenido una inquietud constante por reducirla, dado que se produce con mayor intensidad entre los votantes de izquierda y de centro-izquierda y, de manera especial, entre el electorado más joven. La abstención reduciría, pues, sus posibilidades de conseguir la mayoría electoral (PSOE, 2004: 29). Entre las razones que conducirían a los votantes de izquierda a la abstención, el PSOE asume la responsabilidad de la desmovilización generada por el debilitamiento del contacto con los ciudadanos, y asume el empeño en liderar la movilización ciudadana y en trabajar conjuntamente con las organizaciones y movimientos sociales: “el PSOE ha dejado la iniciativa de la movilización en manos de otros movimientos sociales, porque consideró que en la normalidad democrática era suficiente desarrollar la actividad política en los foros institucionales, olvidando que gran parte de la legitimidad de la izquierda proviene de la traslación a la política de las aspiraciones, intereses y reivindicaciones que nacen y se desarrollan primero en la sociedad” (PSOE, 2004: 67-68).

En IU la preocupación por la abstención ha sido también una constante desde su constitución y ha considerado su obligación como organización política luchar contra la misma. Uno de los factores que se señalan es la “crisis de la izquierda” y su incapacidad para “dar respuesta a las viejas y nuevas contradicciones” sociales (IU, 1990: 36), así como el reiterado incumplimiento de las promesas electorales (IU, 1992: 5).

Por el contrario, la preocupación del PP por la abstención ha tenido duración limitada. La inquietud se ha producido sólo cuando el partido estaba en la oposición y no había conseguido aglutinar todavía a la mayoría de partidos de derecha existentes en el espectro político ni se había constituido en alternativa de gobierno (PP, 1990: 22). Es decir, el llamamiento se dirigía a los potenciales votantes de derecha y a los electores desencantados del PSOE, y deja de producirse en 1993 cuando el PP se acerca a la mayoría parlamentaria.

ESTRATEGIAS PARTIDISTAS Y SOCIEDAD CIVIL

¿Qué estrategias organizativas han utilizado los partidos políticos españoles de ámbito estatal en relación con las organizaciones sociales? En el período 1977-2004 podemos distinguir tres tipos de estrategia: (i) estrategias de *competición* basadas en la creación de organizaciones afines al partido que compiten por miembros y recursos con el resto de organizaciones sociales de su sector; (ii) estrategias de *cooptación* y *entrismo* que buscan fomentar la presencia de los militantes del partido en las organizaciones y movimientos sociales, la introducción estatutaria de figuras de afiliación colectiva o la cooptación directa de dirigentes sociales destacados; y, finalmente, (iii) estrategias de *colaboración* a través de la invitación a los movimientos sociales para que participen en la elaboración programática, la creación de plataformas o la integración en otras ya existentes y la implementación de campañas conjuntas.

En las siguientes páginas se mostrará cómo las dos primeras estrategias han cedido paso, en líneas generales, a la última de ellas. La búsqueda de la colaboración de las organizaciones sociales con el partido puede obedecer a diferentes motivaciones, desde un acercamiento que facilite el conocimiento sobre los intereses y las demandas de la sociedad hasta la búsqueda de una nueva legitimidad social.

Estrategias de competición

El PSOE, en los años ochenta, se propuso la creación de algunas organizaciones sociales en temas de “interés estratégico” como las mujeres, el ecologismo y el pacifismo, para que facilitasen la presencia socialista en la sociedad (PSOE, 1988: 82). Este objetivo se concretó en la creación (o en el apoyo a la creación) de la Federación de Mujeres Progresistas (FMP), el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) y Solidaridad Internacional (SI)². La voluntad de captación de militantes y del voto joven, sector al que el partido consideraba más comprometido con estas causas, era evidente. Además, en esos años los jóvenes se mostraban muy activos en la campaña por el ‘No’ en el referéndum de la OTAN y organizaron varias protestas contra algunas políticas del Gobierno —por ejemplo, el Plan de Empleo Juvenil (Craig, 1995: 25).

Se pretendía también dar respuesta, por un lado, a nuevas formas de organización social que podrían terminar constituyéndose en adversarios políticos y, por otro, hacer frente al surgimiento de IU en el terreno electoral. Es decir, no se trataba sólo de ganar más apoyos, sino de no perder algunos de los que se tenían. Corresponde a una estrategia que José Félix Tezanos (1987) defendía por razones táctico-políticas, sociológicas y

² En los dos primeros casos, la autonomía de la asociación respecto al partido es hoy en día total, aunque se dé la circunstancia de que afiliados y dirigentes del PSOE formen parte del MPDL o de la FMP. En cambio, SI sigue siendo una organización auspiciada por el partido y en su patronato figuran destacados dirigentes socialistas.

prácticas, dada la elevada coincidencia manifestada por los afiliados socialistas entre los ideales y objetivos del socialismo y los de los movimientos sociales feministas, pacifistas y ecologistas y el apoyo cada vez más mayoritario de la sociedad a estos valores. Además, más del 30% de los españoles manifestaba que contemplaría con "simpatía activa" la aparición de un partido ecologista, y por lo menos el 20% (el 37% entre los jóvenes de 18 a 21 años) estaría dispuesto a dar su voto al nuevo partido verde³. La siguiente reflexión del partido sobre el movimiento ecologista es muy ilustrativa: "Se trata de ampliar el marco de los apoyos sociales al proyecto político socialista, sin regatear las incomodidades que estas aperturas van a producir en una organización acostumbrada a una realidad orgánica escasamente dinámica que hay que renovar para ser capaces de responder al surgimiento de nuevas demandas sociales que, de otra forma, pueden terminar configurando movimientos alternativos semejantes a los existentes en otros países europeos" (PSOE, 1988: 52). Por último, a través de los movimientos sociales se pretendía articular una mayoría social que apoyara activamente al partido en la modernización de la sociedad (PSOE, 1988: 26).

Por su parte, el PCE, en los años sesenta había auspiciado dos grandes organizaciones populares que operaban bajo la dictadura franquista como síntesis de diferentes reivindicaciones sociales: el Movimiento Democrático de Mujeres (MDM) y el Movimiento Popular y Ciudadano (MPC). La gran mayoría de sus integrantes eran, a su vez, militantes del partido. Entre las funciones del MPC se encontraban la *re*-construcción del tejido social y la educación cívico-política democrática (PCE, 1978: 34). Por su parte, el MDM fue impulsado inicialmente en 1965 como una red de apoyo a presas y presos políticos y fue evolucionando hacia presupuestos feministas. Con la llegada de la democracia y la instauración de una política desmovilizadora por parte de los partidos de izquierda⁴, el PCE abandonó su apoyo a estos movimientos. A partir de entonces, el PCE rechazó la

³ Encuesta realizada por el Instituto IDES en abril de 1986 con una muestra nacional de 2.017 entrevistas, *Estudio Sociológico sobre el Medio Ambiente en España*. Datos ofrecidos por Tezanos (1987: 170).

⁴ A partir de 1973 España experimentó un proceso de creciente movilización popular inicialmente no dirigida por ningún grupo político. Paulatinamente, los partidos de la oposición fueron controlando estas plataformas y alentando el asociacionismo para fortalecer sus apoyos sociales y forzar y condicionar la negociación con las fuerzas aperturistas del régimen franquista. Este objetivo era mucho más predominante en la Junta Democrática de la que el PCE formaba parte que de la Plataforma de Convergencia Democrática liderada por el PSOE, más bien partidaria de desarrollar una política de negociaciones por arriba, evitando las demostraciones de fuerza de las acciones de masas. La constitución de Coordinación Democrática (la *PlataJunta*) marcará un cambio de estrategia. La percepción de la imposibilidad de imponer la ruptura y del peligro que una movilización social demasiado alta pudiera provocar la intervención de los militares, así como el deseo del PSOE de debilitar el protagonismo del PCE en el asociacionismo ciudadano, impusieron el práctico desmantelamiento de los incipientes movimientos sociales. Por su parte, la aceptación del PCE de la renuncia a la acción de masas se debió al temor a quedar marginado del proceso negociador (Oñate, 1998: 158-166). En un segundo momento, la crisis económica reafirmó para los partidos la necesidad de mantener la desmovilización. Así, en diciembre de 1977, el PSOE y el PCE firmaron un pacto de distensión de las manifestaciones para llevar a la práctica el Pacto de La Moncloa (Sastre García, 1997: 54).

creación de organizaciones por convicción en la necesaria independencia de los movimientos sociales⁵, aunque seguramente también porque conservaba el apoyo de muchas de ellas al estar integrados y/o dirigidos por militantes comunistas. IU mantuvo la misma línea y ni siquiera creó una organización juvenil afín a su proyecto como sí lo hicieron el PSOE (JSE), el PP (NN.GG) o el propio PCE (UJCE).

El PP también ha tenido la pretensión de ocupar un espacio en el terreno social a través de organizaciones propias. En 1978, AP programaba la organización de asociaciones de tiempo libre, culturales o de acción ciudadana, para detectar las reivindicaciones de los ciudadanos. Se valoraba con especial interés el mundo educativo de donde se esperaba reclutar cuadros profesionales y dirigentes (AP, 1978: 70). En ese año se constituyó la Fundación Humanismo y Democracia, dedicada a temas de cooperación al desarrollo, el mismo ámbito al que se sumó la Fundación Iberoamérica Europa en 1984. Por otro lado, en 1982 Manuel Fraga impulsó la creación de una organización de mujeres, Mujeres Conservadoras (después, Mujeres para la Democracia), como respuesta al asociacionismo de mujeres vinculado a la izquierda, asociación que el partido sigue considerando como propia (PP, 2002). El PP no ha renunciado hasta la fecha a esta estrategia y ha seguido fomentando la creación de organizaciones, sobre todo en el ámbito asistencial o en la cooperación al desarrollo.

Estrategias de cooptación y entrismo

Desde inicios de los años ochenta, el PSOE pedía a sus afiliados que participaran en las organizaciones sociales para “analizar la realidad social y para llevar a ellos el mensaje socialista” (PSOE, 1981: 203). La influencia social es una fuente de preocupación constante en esta época: “Si la Secretaría [de Participación Ciudadana] no se preocupa seriamente de la participación de los militantes en cada una de las esferas de la vida social que se están democratizando, nos podemos encontrar con la paradoja de que aumenta la democratización de la vida social y disminuye la influencia de los socialistas”⁶. Tras la huelga general del 14-D de 1988 convocada por CC.OO y UGT, el partido sustituyó la obligación de afiliarse a la UGT de los militantes socialistas por la recomendación de hacerlo “en caso de actuar sindicalmente” y se complementó con el deber de participar en algún movimiento social (Estatutos Federales 1990, artículo 10)⁷, obligación que todavía

⁵ Marisa Castro, exSecretaria de Mujer de IU, entrevista personal (7/3/05).

⁶ Entrevista a Rafael Román, Secretario de Movimientos Sociales y Participación del PSOE de Andalucía, en la revista *Participa* núm.1 (1988).

⁷ Según el informe de gestión presentado ese año, cerca del 40 por ciento de los afiliados del partido participaban en otras organizaciones, aunque el objetivo era el 50 por ciento de la afiliación (PSOE, 1990b). Se puso en marcha un sistema de identificación de los militantes que permitiera conocer la evolución de la presencia socialista en los movimientos asociativos (PSOE, 1994b: 133). No hay constancia de que este censo haya sido actualizado ya que precisamente la creación de un archivo de afiliados a través del cual se puedan conocer sus áreas de interés es una propuesta del *Plan de Calidad* (2001) y del *Plan Federal de Modernización de Agrupaciones* (2004).

se mantiene en la actualidad, aunque con un cambio importante de perspectiva: ya no se pretende que los militantes lleven el mensaje socialista al seno de las organizaciones, sino que recojan sus propuestas e informen al partido⁸.

Por otro lado, en 1984 se aprobó la figura de la “afiliación colectiva” para aquellas organizaciones “ideológicamente afines” y que desarrollasen “una labor efectiva dentro del socialismo” (Estatutos Federales 1984, artículo 6). Progresivamente la vinculación se fue haciendo más laxa y esta fórmula se sustituyó por la “adhesión” (1990) y, más tarde, por el “convenio de colaboración”⁹ (1997). La “colaboración” permitiría, según el PSOE, que estas organizaciones se implicaran de forma más confortable en su proyecto “sin voluntad de utilización partidaria” (PSOE, 1997a: 191) y, a partir de la segunda mitad de los años noventa, ha sido una práctica frecuente. Es un tipo de relación menos formalizada, de carácter puntual con el objetivo de desarrollar actuaciones conjuntas (plataformas sectoriales, campañas, etc.)¹⁰.

El aumento de la presencia de los militantes *aliancistas* en la sociedad civil ha sido igualmente una estrategia constante desde la constitución de Alianza Popular que buscaba, a través de fórmulas de estructura indirecta, imbricar el partido con ciertos sectores organizados de la sociedad (AP, 1982: 55). En esta línea se afirmaba: “[los] militantes tienen acceso a, cuando no control de, una gran cantidad de instituciones de opinión y acción cultural que, debidamente articuladas, podrían servir de importantes elementos de penetración social” (AP, 1984: 69). La penetración social buscaba, además, la cooptación de personas “reputadas y representativas” de la sociedad que podían proporcionarle, a nivel de candidaturas, una valiosa aportación (PP, 1984, y PP, 1990).

Por último, aunque el PCE decidiera no crear organizaciones o movimientos afines, una de sus prioridades fue también aumentar la presencia social de los militantes comunistas. La organización social se consideraba necesaria para desarrollar la política eurocomunista (PCE, 1978: 36), especialmente en un momento en el que el PCE había obtenido muy malos resultados electorales, sobre todo entre las mujeres y los jóvenes, y había sufrido un descenso considerable de afiliados. La explicación de estos fenómenos se hallaba en buena medida, según el partido, en el hecho de no haber sabido combinar la “lucha institucional” con la “lucha de masas” (PCE, 1981: 11). El PCE lamentaba así haber “descabezado” algunos movimientos sociales ante la necesidad de reclutar candidatos a cargos públicos (PCE, 1983: 42). Entonces, se propondrá potenciar el trabajo de los comunistas en movimientos sociales, tanto para escuchar sus propuestas como

⁸ Estatutos Federales 2004, artículo 10.

⁹ Desde 1990, las organizaciones que hayan suscrito estos convenios tienen la posibilidad de participar en el Congreso Federal, en el Comité Federal y en los Comités regionales, con voz pero sin voto, a no ser que se acuerde lo contrario en el documento de asociación, y la asistencia de sus representantes en la CEF (Estatutos Federales 1990, artículos 24 y 30). Sólo dos organizaciones la han solicitado: la Fundación Europa y la Federación de Mujeres Progresistas.

¹⁰ Mariví Montserín, ex coordinadora de la secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE, entrevista personal, 30/11/04.

para defender en su seno las alternativas elaboradas en el partido. La militancia política no se entendía sin conexión con la militancia social, incluso se consideraba deseable que los líderes tuvieran relación directa con los movimientos de base o que fueran activistas sociales¹¹ (PCE, 1987: 21).

Para IU, ésta ha sido igualmente una voluntad permanente, ya que considera que la relación con su base social y con los movimientos asociativos resulta indispensable en la elaboración programática. Los actuales estatutos lo recogen del siguiente modo: “La política institucional desde la izquierda debe ser diseñada pensando en la sociedad civil, teniendo en cuenta los movimientos sociales y las sensibilidades existentes en su seno” (Estatutos Federales 2004, artículo 8.8). En este sentido, IU promueve el trabajo voluntario como instrumento de participación en la reflexión sobre la realidad y los problemas. Por otra parte, el activismo se considera indispensable para mantener una movilización social en la izquierda que contribuya a la movilización electoral (IU, 1997: 60).

No obstante, las sucesivas asambleas federales lamentarán que la extensión de IU en la sociedad hubiera quedado pendiente (IU, 1994: 62). A pesar de haber defendido siempre la autonomía de los movimientos sociales, la VIII Asamblea Federal dará cuenta de la actuación inapropiada respecto al “movimiento alterglobalizador” por parte de algunos sectores de IU que trasladaron las disputas internas al movimiento para reforzar su poder en la organización (IU, 2004: 21). Por otro lado, aunque muchos militantes de IU desarrollan una actividad política en numerosas organizaciones sociales, desde la organización se reconoce que no hay mucha comunicación con los mismos y, en el nivel federal, no se ha realizado ningún estudio sobre el activismo social de la afiliación¹². Para algunos sectores de IU, la coalición habría descuidado, además, las relaciones históricas que el PCE mantenía con algunos colectivos sociales¹³.

La integración de colectivos o asociaciones en IU se basa en el mismo procedimiento formal con el que se integran los partidos a la coalición. La petición se realiza ante la Presidencia Ejecutiva Federal y la decisión corresponde a la Asamblea Federal. Opera el principio de adscripción individual de los miembros del colectivo en cuestión y supone su reconocimiento como corriente ideológica y realidad organizativa de IU (Estatutos Federales 1997, artículo 11).

De este modo, tras la erosión de los vínculos de los partidos de izquierda con los sindicatos (PSOE-UGT e IU-CC.OO) por las confrontaciones producidas entre ambos en los años ochenta y noventa, estos partidos se volcaron en los nuevos movimientos sociales¹⁴. El PSOE, además, precisaba de bases sociales que apoyaran las políticas del

¹¹ Se imponía como obligación estatutaria “prestar particular atención a las organizaciones de masas” (Estatutos Federales 1981, artículo 66) y “encabezar las luchas de los sectores populares” (Estatutos Federales 1981, artículo 26).

¹² David Chica, secretario federal de Movimientos Sociales de IU, entrevista personal (3/11/04).

¹³ Ginés Fernández, ex secretario federal de Organización y Finanzas de IU, entrevista personal, (5/11/04).

¹⁴ Para el análisis de las relaciones PSOE-UGT véase Astudillo (1998) y para el caso IU-CC.OO véase Ramiro (2004).

gobierno y defendieran su proyecto frente al nuevo competidor por la izquierda (IU), que a finales de los años noventa conseguía captar a un sector importante de ex votantes socialistas. Esta estrategia servía además a otros objetivos. Por un lado, los partidos necesitaban contar con activistas en sus filas para hacer más fácil la participación de las organizaciones sociales en el diseño de las ofertas programáticas: no es lo mismo negociar un programa con las organizaciones sociales cuando quienes hablan en nombre del partido son políticos profesionales que cuando se trata de personas procedentes del tejido social (Paramio, 1999: 92). Por otro lado, incorporando a representantes de distintas reivindicaciones, los partidos podrían hacer creíble más fácilmente ante el electorado su compromiso con ciertas demandas sociales.

Una década más tarde, la hegemonía tradicional de la izquierda en la sociedad civil organizada se ha debilitado y, especialmente desde la segunda mitad de los años noventa, militantes y dirigentes del PP están presentes en numerosas asociaciones, sobre todo de carácter asistencial o de cooperación al desarrollo. Durante los años en el gobierno, el PP utilizó los recursos estatales para fortalecer a organizaciones afines a su proyecto. Son diversos los informes de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (CONGDE) o de otras ONG de reconocido prestigio que critican la parcialidad de las subvenciones concedidas por la Agencia Española de Cooperación Internacional entre 1996-2004. En esos años, un número importante de fundaciones y organizaciones confesionales se constituyeron en ONG para participar del reparto de la ayuda oficial al desarrollo, produciéndose desde entonces una entrada masiva de ONG confesionales a la CONGDE. A modo de ejemplo, según un informe presentado en diciembre de 2003 por Intermón, en la conferencia de donantes organizada en octubre de ese año en Madrid para la reconstrucción de Irak, la CONGDE no fue ni siquiera invitada, mientras que sí lo hicieron la Fundación Iberoamérica Europa (FIE-CIPIE), presidida entonces por el diputado del PP y portavoz en la comisión de Cooperación Internacional del Congreso de los Diputados, Pablo Izquierdo; la Fundación Promoción Social de la Cultura (FPSC), situada en la órbita del Opus Dei; y la Fundación Humanismo y Democracia (FHD), presidida por el ex embajador español en Washington y senador y diputado durante varias legislaturas del PP, Javier Rupérez. Según el informe mencionado, la ONG que más dinero recibió en concepto de ayuda humanitaria para Irak, después de la Cruz Roja, fue la FIE-CIPIE, seguida de la FPSC, Mensajeros de la Paz, cuya presidenta de honor es Ana Botella y entre cuyos colaboradores se encuentran diversos parlamentarios del PP y varios ex ministros, y la FHD, vinculada orgánicamente al PP (Intermón, 2003). Estas organizaciones también recibieron un aumento espectacular de los fondos públicos en materia de cooperación al desarrollo en los últimos años (CONGDE, 2004), lo que permitió que la FIE-CIPIE doblara su volumen de gasto entre 1999 y 2002 (Revilla, 2004: 213-14). Asimismo, el PP se encuentra vinculado a varias organizaciones de defensa de la familia. Por ejemplo, el vicepresidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ocupó dos Secretarías de Estado entre 1996 y 2004.

En cuanto a las asociaciones de vecinos, dominadas en la transición a la democracia por el PCE y en los años ochenta por el PSOE, se han transformado, en ocasiones, en un

punto de apoyo del PP para la crítica a los ayuntamientos de ciudades gobernadas por la izquierda (Pont Vidal, 2003: 25). En algunas ciudades gobernadas por el PP, el partido ha promovido también la creación de coordinadoras vecinales afines a sus propuestas (Recio y Naya, 2004: 74). En el ámbito de las organizaciones sociales que defienden demandas sociales más reivindicativas, la influencia es mayor para los partidos de izquierda al existir una mayor sintonía con sus propuestas políticas.

Estrategias de colaboración

Las estrategias de competición y cooptación cedieron paso a partir de los años noventa a distintas fórmulas de colaboración con las organizaciones sociales. Las primeras estrategias son vistas ahora por los dirigentes de los partidos de izquierda como un “error”, ya que desvirtúan la autonomía de las organizaciones sociales y acaban teniendo efectos negativos en la relación del partido con los movimientos sociales¹⁵. Por otra parte, resultaba patente que el activismo social de los afiliados era reducido. Seguramente, sumar al activismo partidista otra “jornada” asociativa resultaba una tarea ímproba para cualquier militante con trabajo y familia.

Hasta 1984, en el PSOE, dentro de cada Comisión Ejecutiva había una secretaria de Acción Sectorial, cuya responsabilidad consistía en establecer contactos con las organizaciones sociales. Desde ese año, el PSOE cuenta también con un órgano ejecutivo encargado de las relaciones con los movimientos sociales. Se trata de la secretaria de Participación Ciudadana —secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs desde 2000. Otras secretarías han sido también creadas posteriormente para buscar el contacto con determinados movimientos sociales, como las de Medio Ambiente y de Consumidores y Usuarios¹⁶ (2000).

En el último período de Gobierno socialista (1993-1996), se reconocía el deterioro y enfriamiento de las relaciones con el entramado asociativo (PSOE, 1994b: 39). La salida del gobierno implicará un cambio de orientación en las relaciones con los movimientos sociales. Consciente del anquilosamiento producido en la última etapa y de la incapacidad de restablecer los lazos con el tejido social tras el paso a la oposición, el PSOE se marcó como objetivo avanzar hacia un “partido de participación” (PSOE, 1997a: 205). La desmovilización social y el cambio en la composición del electorado socialista eran una fuente de preocupación para el nuevo secretario general del partido, Joaquín Almunia: “La repercusión social de uno u otro tipo de electorado no es igual. A lo largo de los

¹⁵ Óscar López, secretario ejecutivo adjunto a la secretaria de Organización del PSOE (entrevista personal, 26/11/04) y Mariví Monteseirín, ex Coordinadora de la Secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del PSOE (entrevista personal, 30/11/04).

¹⁶ La secretaria de Consumidores y Usuarios desapareció de la estructura de la CEF en el XXXVI Congreso (2004). En los niveles regionales existían con anterioridad secretarías de Medio Ambiente y de Solidaridad y Cooperación (PSOE, 1998).

años, nuestro electorado se ha ido desplazando de sectores urbanos, dinámicos, con capacidad de movilizar a través de la expresión de sus ideas, a otros sectores sociales más limitados en cuanto a su capacidad de enviar mensajes al resto de la sociedad (...). Si queremos recuperar la mayoría política, tenemos que recuperar al electorado urbano, volver a conectar con la Universidad, con líderes de opinión, con los intelectuales, con líderes sociales, con los jóvenes”¹⁷.

Las Organizaciones Sectoriales (OS) han sido los canales de contacto básico con las organizaciones sociales, a través de las cuales se estudia la integración de sus propuestas en el programa electoral, a la vez que se busca “ganar su confianza y mostrar la validez de las propuestas del partido” (PSOE, 1990b: 90). En los últimos años se incorporó a dirigentes de asociaciones en estas instancias para mejorar la información e implicación de los movimientos sociales y desde 1998 se han llevado a cabo varios relanzamientos de las OS.

El diálogo con las asociaciones se desarrolló durante la etapa en la oposición (1996-2004) a tres niveles: 1) celebración de jornadas para analizar las demandas que las organizaciones planteaban y para darles a conocer las iniciativas parlamentarias que el PSOE había presentado; 2) proyección de un tipo de relación específica para aquellas asociaciones que bien por su implantación o trascendencia, requerían, según el partido, unas relaciones más personalizadas; y, 3) la novedad más destacada, el impulso a la creación de plataformas sociales que articularan respuestas a las políticas del Partido Popular (PSOE, 1997b). La apertura a la sociedad civil se materializará sobre todo tras la derrota en las elecciones de 2000. Las resoluciones del XXXV Congreso plasman del siguiente modo el tipo de relación con las organizaciones sociales que la nueva Ejecutiva quiere establecer: “Queremos estar en conexión con los movimientos sociales y debemos hacer un continuo esfuerzo de adaptación para hacer frente al riesgo de que los cambios sociales y económicos se produzcan al margen de la política (...). Es imprescindible que el PSOE incremente su presencia en la amplia red de tejido social y que nuestra presencia en todas las instituciones públicas vaya acompañada de una continua relación con los ciudadanos” (PSOE, 2000: 34-38).

El contacto de las distintas secretarías con las asociaciones sociales se intensificó en el período 2002-2004. Las plataformas sociales organizadas contra la política del Gobierno *popular* (reforma educativa, reforma laboral, crisis del Prestige o la guerra de Irak) sirvieron de punto de encuentro con las organizaciones sociales, lo que contribuyó al mismo tiempo, a superar las reticencias que éstas podían tener respecto al PSOE¹⁸.

¹⁷ Declaraciones de Joaquín Almunia, secretario general del PSOE entre 1997 y 2000, en una entrevista realizada por AmaliaValcárcel (1997: 31-32).

¹⁸ Así lo explicaba Mariví Monteserín, ex coordinadora de la secretaría de Movimientos Sociales del PSOE (entrevista personal, 30/11/04): “Nos fuimos ganando poco a poco nuestro espacio. Hemos estado en todas las reuniones con humildad y escuchando mucho a otras organizaciones, es lo que creíamos que teníamos que hacer dada nuestra trayectoria. En algún foro alguien nos dijo ‘nosotros siempre hemos estado aquí, vosotros os fuisteis y ahora volvéis’. Pero fuimos muy serios, no hicimos demagogia, y es que nos unía mucho Aznar porque el objetivo era cambiar el gobierno”.

El *Plan de Calidad* interno elaborado en 2001 y el *Plan de Modernización de Agrupaciones* (2004) incluyen el análisis de la realidad asociativa del entorno de cada agrupación local con el objetivo de reconocer a los interlocutores y estar pendientes de sus demandas. En la presentación del informe de gestión ante el XXXVI Congreso (2004) el secretario general del PSOE Rodríguez Zapatero marcaba como “elemento estructural” la construcción de alianzas duraderas basadas en un clima de confianza y de mutuo entendimiento con los movimientos sociales, para “hacer que el partido milite con la sociedad civil”. Ello exigía un cambio de cultura política en la organización dirigida a conseguir una mayor permeabilidad a las propuestas de los movimientos sociales y una mayor aproximación de los responsables institucionales con el entorno (PSOE, 2004: 58-59).

En IU, la secretaría de Movimientos Sociales se creó en 1992. Hasta ese momento, las relaciones con los movimientos y organizaciones sociales se articulaban con las distintas *áreas de elaboración colectiva*. En el año 2000 esta secretaría se transforma en la secretaría de Movimientos Sociales y Desarrollo Sostenible, y a la estructura ejecutiva se suman las secretarías de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos. En 2003 se unen Ecología y Medio Ambiente y la secretaría de Movimientos Sociales incorpora Globalización y Juventud. Esto último obedece a la necesidad de dar respuesta por parte de IU a la nueva realidad instaurada tras la aparición del “movimiento de movimientos” y los foros sociales, con la intención de crear espacios comunes de trabajo y de propuesta¹⁹. La secretaría de Movimientos Sociales, Globalización y Juventud es reestructurada en 2004 y se produce una división de funciones entre la secretaría de Solidaridad y Cooperación y la nueva secretaría de Globalización, quedando Juventud en la nueva secretaría de Movimientos Sociales.

En 1993, una parte del equipo dirigente de IU, analizando las consecuencias de la caída del muro de Berlín, trató de conciliar la identidad comunista con un proyecto que diera más énfasis a lo “rojo-verde-violeta” y apostase por reducir el peso de los partidos integrantes en IU en la organización, para dar más preeminencia al modelo de “movimiento político y social” (M.P.S.) en el que se había constituido Izquierda Unida. Esta estrategia se reflejó en los documentos “Manifiesto Convocatoria por la Alternativa” y “Convocatoria por la Regeneración”, donde se denunciaban los casos de corrupción vinculados al PSOE y las “políticas antisociales” del gobierno al que se exigía la “Rectificación” (el “giro a la izquierda” del PSOE), con la intención de utilizarlos “como base de encuentro con los colectivos más dinámicos de la sociedad (IU, 1994: 7). IU participó también en esos años en la “Plataforma Cívica por los Derechos Sociales” articulada en contra de la reforma laboral del Gobierno, y en la “Plataforma por el 0,7”. En este periodo se estrecharon igualmente las relaciones con el ecologismo político y se formalizó la integración de Los Verdes en la federación andaluza de IU. Se formó posteriormente una “Coordinadora para una Izquierda Verde y Alternativa” en la que coincidían militantes de IU y gentes de diversos colectivos sociales. El objetivo era configurar una forma de colaboración parecida

¹⁹ David Chica, Secretario de Movimientos Sociales de IU, entrevista personal, 3/11/04.

a la de las movilizaciones de los años ochenta de cara a las elecciones europeas de 1994 e incluso se propuso la participación en las listas a personas vinculadas a movimientos sociales y no militantes de IU (Pastor, 2004: 35). Estas acciones eran funcionales a la estrategia política de la dirección en esos años, el *sorpasso*, con el objetivo de adelantar electoralmente al PSOE (IU, 1994: 25).

Esta estrategia finalmente no tuvo éxito dada la crisis interna desatada en IU por las discrepancias entre la corriente Nueva Izquierda y la dirección y por la ruptura de las relaciones en 1997 con Iniciativa per Catalunya- Els Verds, así como por la difícil comprensión en algunos sectores de la sociedad española de la estrategia de confrontación total con el PSOE al tiempo que se pactaba a nivel municipal con el PP, sumada a la desmovilización social que siguió a la victoria del PP en las elecciones generales de 1996. La coyuntura de la movilización social a partir del año 2000 permitió a IU recuperar espacios en el ámbito social y plantear propuestas en común con el tejido asociativo (IU, 2004: 20). IU participó en todas las manifestaciones y plataformas contra las políticas del PP.

La aportación de propuestas por parte de la sociedad civil es un elemento básico del modelo organizativo de M.P.S de IU. Las *áreas de elaboración colectiva* se concibieron para ser marcos receptores de propuestas, canales de interlocución con la sociedad y los movimientos sociales e impulsoras de la movilización social (Estatutos Federales 1992, artículo 24). La imbricación de las *áreas* con los movimientos sociales se realiza a través de fórmulas flexibles y abiertas, como la invitación de los representantes de esos movimientos a las reuniones de los plenos de las *áreas*, la realización de jornadas o el asesoramiento a los grupos institucionales y órganos de dirección de IU y su participación en las convenciones programáticas. Sin embargo, es reconocida por IU la existencia de una "época dorada" de las *áreas* hasta principios de los noventa, que ha ido languideciendo. En ese momento, en las *áreas* se daban reuniones bastante masivas de afiliados y simpatizantes en las que, además, era perceptible la presencia del tejido social. Para algunos sectores del partido, el origen de este decaimiento reside en la propia creación de las secretarías federales en 1992, una estructura de carácter jerárquico más propia de un partido tradicional, como forma de organización más ágil y eficaz. Las secretarías contaron con una profunda oposición de las *áreas* por considerar que quedaban relegadas a un segundo plano en la toma de decisiones y que se desvirtuaba la elaboración programática como trabajo colectivo de militantes, simpatizantes y organizaciones, expresión de una nueva forma de hacer política²⁰.

²⁰ Ya en 1992, en el *Documento de Organización de las Áreas*, se valoraba críticamente que las áreas no habían logrado transformarse en verdaderos lugares de participación y elaboración colectiva. Se señalaban como causas el solapamiento funcional y la falta de coordinación entre la dirección política, las secretarías, y las áreas; el uso sectario de las áreas en las disputas internas; la falta de implantación de las áreas en algunas federaciones; la acumulación de cargos en pocas personas y la pérdida de representación de las áreas en los órganos federales a partir de la III Asamblea Federal. En julio de 1995, el Comité Político Federal aprobaba el "Plan para el Relanzamiento de la Elaboración Programática". En las sucesivas asambleas se han venido haciendo exactamente las mismas críticas a su funcionamiento.

Los sectores críticos (Plataforma de Izquierdas, Espacio Alternativo y algunos sectores vinculados al PCE) reprochan a la dirección que el programa electoral haya pasado a elaborarse, en la práctica, por un grupo reducido de personas, vulnerando, de este modo, la esencia de IU en tanto que M.P.S²¹. Pero también se pueden considerar otros factores para explicar tanto la baja participación como la desafección ciudadana con los partidos y el desaliento de algunos militantes ante las recurrentes crisis internas de IU.

Por otro lado, las asambleas de base tienen un nivel de funcionamiento abierto donde se busca la participación de simpatizantes y de miembros de organizaciones sociales. Los estatutos recomiendan desde 1997 un uso frecuente de las mismas (por lo menos dos veces al año) y sus actividades incluyen explicar la línea política de la organización, recoger opiniones o someter a debate propuestas programáticas, conocer la opinión de los electores de IU, recoger sondeos sobre las características de las distintas candidaturas y preparar movilizaciones sociales (Estatutos Federales 2004, artículo 29.1.A).

En el PP, desde 1978 encontramos una vicesecretaría nacional de Organización Sectorial, Agrupaciones y Movimientos Sociales, que en 1981 se convertirá en el área de Relaciones Sectoriales y en 1986 en el área de Política Social y Sectorial, que englobaba todas las políticas sectoriales y canalizaba las relaciones con los sectores sociales de referencia de cada política. No obstante, estas relaciones se encauzaban con mayor frecuencia a través de los portavoces de las comisiones del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados. Dado que los grupos de trabajo del partido seguían el organigrama de las comisiones parlamentarias, los portavoces del PP en las distintas comisiones eran los que mantenían relaciones con las organizaciones sociales y elaboraban las propuestas programáticas.

En 1999 se creó el área de Participación y Acción Sectorial, dentro de la cual se adscribía la secretaría de Participación Ciudadana y de Relaciones con los Movimientos Asociativos. Es significativa la introducción de la palabra “participación” en la denominación del área. El cambio de nombre en 1999 pretendía poner el acento en la receptividad hacia las propuestas de las diferentes asociaciones y en la voluntad de visualizar externamente que el partido daba protagonismo a la sociedad en sus estructuras (PP, 1999b: 4). A través de la misma, el PP pretendía mantener canales permanentes de diálogo con los distintos sectores sociales, identificar sus propuestas y planteamientos, transmitir los criterios del partido entre los diferentes grupos sociales, y hacer llegar iniciativas y propuestas a los poderes públicos e instituciones competentes en cada caso²². Por otro lado, el partido pone énfasis en aquellos sectores sociales que representan a “los colectivos más desfavorecidos”²³, lo que reafirma la conexión que la organización establece entre organizaciones sociales y bienestar social (discapacitados, mayores, mujeres, etc.).

²¹ Jaime Pastor, dirigente del Espacio Alternativo (entrevista personal, 12/11/04) y Susana López, líder de la corriente Plataforma de Izquierdas (entrevista personal, 25/11/04).

²² Julio Sánchez, secretario de Participación y Acción Sectorial del PP, entrevista personal, 16/3/05.

²³ Preámbulo de la ponencia de estatutos aprobada en el XIII Congreso (1999: 7).

A finales de 1999, se crearon los Foros 2000 como espacio para involucrar a los actores sociales en la elaboración del programa de las elecciones generales de 2000 y para dar una proyección pública al programa en esa fase. A través de ellos, el PP quería trasladar a la sociedad sus propuestas y posiciones y a la vez recoger de la misma, sugerencias o inquietudes. Se basan en la celebración de reuniones con participación de profesionales relevantes en materias objeto de los foros, de representantes de los sectores sociales y de cargos del partido. Éstos tienen un funcionamiento virtual, pero periódicamente se realizan actos con participación de colectivos, dirigentes y afiliados del partido. La colaboración de los distintos colectivos al proyecto *popular* también se materializa a través de las Comisiones Nacionales de Estudio, tanto a nivel nacional como regional. En el XV Congreso (2004) el nuevo presidente del PP, Mariano Rajoy, reclamó a la organización que estuviera atenta al sentir de las organizaciones sociales: "Una de las cosas que les voy a pedir a los responsables de áreas es que hablen mucho con los sectores sociales (...), que cuando se presenten proyectos se tenga en cuenta el sentir de la sociedad"²⁴.

La colaboración ha pasado pues a entenderse como la mejor estrategia, sobre todo por parte de los partidos de izquierda, y como una forma efectiva de movilización social y electoral en última instancia, fundamental para acceder al gobierno en el caso del PSOE o para recuperar apoyo electoral en el caso de IU. La invasión del espacio de la sociedad civil resultaba contraproducente para este objetivo y los partidos consideraron que la credibilidad de su proyecto ante las organizaciones sociales dependía, en buena medida, del establecimiento de nuevos instrumentos de colaboración. En cambio, el PP no ha renunciado a las estrategias de creación de organizaciones ni de cooptación. Por otra parte, la confrontación que generaron muchas de las decisiones políticas del último Gobierno de Aznar profundizaron la distancia que separaba del PP a los nuevos movimientos sociales, al tiempo que reducía la que existía con los otros dos partidos. Por ejemplo, con el Plan Hidrológico Nacional (PHN) o con el apoyo a la guerra de Irak, las organizaciones ecologistas y pacifistas realizaron varias manifestaciones multitudinarias apoyadas por otros colectivos, como los estudiantes, que también se habían visto afectados por las políticas del Gobierno (LOU, LOCE). Sin embargo, el apoyo del PP a organizaciones más conservadoras, asistenciales o de apoyo a la familia, se manifestó en la colaboración de ambos en las manifestaciones organizadas en 2005 contra el matrimonio entre parejas del mismo sexo o la reforma educativa. Por otra parte, a través de los Foros y las Comisiones Sectoriales de Estudio, el PP ha intentado también obtener el *input* del tejido asociativo.

²⁴ Entrevista a Mariano Rajoy, publicada en *La Gaceta Fin de Semana*, 2 y 3 de octubre de 2004.

CONCLUSIONES

A la voluntad de acercamiento a la sociedad, sobre todo con el tejido asociativo, subyacen diferentes motivaciones. En relación con la tradicional rivalidad entre el PSOE e IU por la competición por un mismo sector del electorado, los dos partidos tienen fuertes incentivos para movilizar a los abstencionistas, aunque el esfuerzo que han dedicado a ello ha sido diferente en uno y otro caso en distintos momentos electorales. Junto a la captación de votantes socialistas, los mejores resultados para IU se han producido cuando la abstención ha sido más baja. Para el PSOE, la activación de los abstencionistas pasó a ser una necesidad a partir de las elecciones de 1993 y, sobre todo, desde el paso a la oposición en 1996. Tanto el PSOE como IU, en particular, han asociado movilización social a movilización electoral y, para ello, han considerado un requisito previo tener cierta capacidad de influencia en el primer tipo de movilización. En contra de la tesis de Katz y Mair (1995) según la cual los partidos ya no tratan de estructurar el voto sino de convencer a unos “consumidores pragmáticos”, para la izquierda no sólo resulta importante la tasa de conversión, sino la tasa de movilización: a mayor participación electoral, mayores posibilidades de triunfo.

El PSOE utilizó, en una primera etapa, la creación de sus propias organizaciones sociales y, posteriormente, al igual que IU, utilizó la cooptación de líderes de los movimientos u organizaciones sociales o el entrismo de sus afiliados en los primeros como fórmulas para garantizarse su apoyo, estrategia a la que también se sumó el PP, con diferencias notables entre los partidos de derecha y de izquierda en el tipo de tejido asociativo con el que se relacionaban (y se relacionan). Esta estrategia generó rechazo entre la sociedad civil organizada y los partidos de izquierda, a pesar de que siguen recomendando a sus miembros (y estatutariamente obligando, aunque con pobres resultados) que tengan también una faceta de activistas sociales; ya no pretenden que sus afiliados sean portavoces del partido, sino que recojan las propuestas de las organizaciones para mantenerse a la vanguardia de lo que pide la sociedad. A la vez, y, sobre todo desde la reducción en su representación parlamentaria, los partidos de izquierda reforzaron las instancias de colaboración con las organizaciones sociales en su seno o se sumaron a las plataformas convocadas por éstas.

Es indudable que en los tres partidos estos mecanismos buscan también mejorar la legitimidad externa de la organización, en un momento de bajas identidades partidistas y de una generalizada valoración negativa de los partidos que convive con una creciente demanda de democratización interna, de apertura a la sociedad y de mayor protagonismo de los ciudadanos en las decisiones públicas. Es decir, los partidos sí se preocupan por su imagen externa y esta preocupación es mayor cuando están en la oposición, cuando el partido atraviesa una grave crisis interna o cuando su imagen pública se ha visto dañada (por ejemplo, por escándalos de corrupción). Es decir, a la imagen de los *partidos en crisis* se añade en esos momentos la imagen de *la crisis del partido* y, mientras que, en el primer caso, no se derivan consecuencias suficientemente contrastadas para los partidos, la segunda de las imágenes resulta fatal para el partido en cuestión. Asimismo,

la necesidad de los partidos de oposición de *reconectarse* con la sociedad constreñiría la adopción de una estrategia de *cartel*. Los partidos necesitan contar con activistas sociales en sus filas para hacer más fácil la participación de las organizaciones sociales en el diseño de las ofertas programáticas, reducir las incoherencias entre las demandas defendidas por el partido y, por último, hacer creíble ante el electorado el compromiso del partido con ciertas demandas sociales.

Cabe decir también, que, para los partidos de izquierdas, las relaciones con el tejido asociativo no son sólo instrumentales (consecuencias electorales). Hemos constatado que sus discursos y documentos están plagados de una permanente reflexión en torno a las disfunciones organizativas de los partidos que generan el distanciamiento respecto a la sociedad, reflexión que no puede separarse de su aspiración a convertir su organización en partidos (“movimiento” en el caso de IU) abiertos y participativos por las distintas finalidades que se atribuyen a este tipo de organización. Esta reflexión es prácticamente inexistente en el PP, pero no por ello ha renunciado a dar mayor proyección a ciertas instancias de recepción de demandas y ha puesto más énfasis en el contacto con la sociedad al fortalecer el área de Participación Ciudadana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AP (1978), Resoluciones aprobadas en el II Congreso Nacional.
- (1979), Resoluciones aprobadas en el III Congreso Nacional.
- (1981), Resoluciones aprobadas en el IV Congreso Nacional.
- (1982), Resoluciones aprobadas en el V Congreso Nacional.
- (1984), Resoluciones aprobadas en el VI Congreso Nacional.
- (1986), Resoluciones aprobadas en el VII Congreso Nacional.
- ASTUDILLO, J. (1998), *Los recursos del socialismo: las cambiantes relaciones entre el PSOE y la UGT (1982-1993)*, Tesis doctoral, Madrid, CEACS, Instituto Juan March.
- BARTOLINI, S. y P. MAIR (1990), *Identity, Competition, and Electoral Availability. The Stabilisation of European Electorates 1885-1985*, Cambridge, Cambridge University Press.
- CONGDE (2004), *Informe de la ONGDE sobre el sector de las ONGD 2004*, (<http://www.congde.org>).
- CRAIG, P. (1995), “Political Mediation, Traditional Parties and New Social Movements: Lessons from the Spanish Socialist Worker’s Party”, *Estudio/ Working Paper 1995/67*, Madrid, CEACS, Instituto Juan March.
- FONT, J. (2001), *Ciudadanos y decisiones públicas*, Barcelona, Ariel.
- GUERRA, A., et al. (1987), *Nuevos horizontes teóricos para el socialismo*, Madrid, Sistema.

- GUNTHER, R. y L. DIAMOND (2003), "Species of Political Parties: A New Typology", *Party Politics* 9 (2):167-199.
- GUNTHER, R. y J.R. MONTERO (2001), "The Anchors of Partisanship. A Comparative Analysis of Voting Behaviour in Four Southern European Democracies", en DIAMANDOUROS, N. y, GUNTHER, R., eds., *Parties, Politics and Democracy in the New Southern Europe*, Baltimore, The John Hopkins University Press.
- INTERMÓN (2003), *Informe "La instrumentalización de la ayuda española a Irak"*.
- IU (1989), Resoluciones aprobadas en la I Asamblea Federal.
- (1990), Resoluciones aprobadas en la II Asamblea Federal.
- (1992), Resoluciones aprobadas en la III Asamblea Federal.
- (1994), Resoluciones aprobadas en la VI Asamblea Federal.
- (1997), Resoluciones aprobadas en la V Asamblea Federal.
- (2004), Resoluciones aprobadas en la VIII Asamblea Federal.
- KATZ, R. y P. MAIR (1995), "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Cartel Party", *Party Politics*, nº 1, pp.1-28.
- KIRCHHEIMER, O. (1980 [1966]), "El camino hacia el partido de todo el mundo", en LENK, K. y, NEUMAN, F. eds., *Teoría y sociología críticas de los partidos políticos*, Barcelona, Anagrama.
- KOOLE, R. (1996), "Cadre, Catch-all or Cartel? A Comment on the Notion of the Cartel Party", *Party Politics*, nº 2, pp. 507-524.
- MAIR, P. (1997), *Party System Change. Approaches and Interpretations*, Oxford, Clarendon Press.
- (2005), "Democracy beyond Parties", Artículo presentado en el panel "Democracy and political parties", ECPR workshop, Granada, nº 14-19 de abril.
- OÑATE, P. (1998), *Consenso e ideología en la transición política a la democracia*, Madrid, CEPC.
- PARAMIO, L. (1999), "Cambios sociales y desconfianza política: el problema de la agregación de preferencias", *Revista Española de Ciencia Política*, nº 1 (1), pp. 81-95.
- PASTOR, J. (2004), "Evolución, crisis y mutaciones de la izquierda transformadora y alternativa", *Mientras tanto*, nº 91-92: 63-82, Especial "25 años de movimientos sociales".
- PCE (1978), Resoluciones aprobadas en el IX Congreso Federal.
- (1981), Resoluciones aprobadas en el X Congreso Federal.
- (1983), Resoluciones aprobadas en el XI Congreso Federal.
- (1987), Resoluciones aprobadas en el XII Congreso Federal.

- POGUNTKE, T. (1996), "Anti-party sentiment. Conceptual thoughts and empirical evidence: exploration into a minefield", *European Journal of Political Research* 29 (3): 319-344.
- PONT VIDAL, J. (2003), "Movimientos sociales, socialismo y socialdemocracia: la necesaria complementariedad política", *Els Papers de la Fundació* núm. 141, Barcelona, Fundació Rafael Campalans.
- PP (1990), Resoluciones aprobadas en el X Congreso Nacional.
- (1993), Resoluciones aprobadas en el XI Congreso Nacional.
- (1996), Resoluciones aprobadas en el XII Congreso Nacional.
- (1999a), Resoluciones aprobadas en el XIII Congreso Nacional.
- (1999b), Informe de gestión aprobado en el XIII Congreso Nacional.
- (2002), *Las propuestas del centro. Un nuevo impulso para España*.
- (1981), Resoluciones aprobadas en el XXIX Congreso Federal.
- (1984), Resoluciones aprobadas en el XXX Congreso Federal.
- PSOE (1988), Informe de gestión aprobado en el XXX Congreso Federal.
- (1990a), Resoluciones aprobadas en el XXXII Congreso Federal.
- (1990b), Informe de gestión aprobado en el XXXII Congreso Federal.
- (1994a), Resoluciones aprobadas en el XXXIII Congreso Federal.
- (1994b), Informe de gestión aprobado en el XXXIII Congreso Federal.
- (1997a), Resoluciones aprobadas en el XXXIV Congreso Federal.
- (1997b), Informe de gestión aprobado en el XXXIV Congreso Federal.
- (1998), *La participación de las mujeres en el PSOE y en las Instituciones Públicas*. Secretaría de Igualdad.
- (2000), Resoluciones aprobadas en el XXXV Congreso Federal.
- (2001), Resoluciones aprobadas en la Conferencia Política.
- (2004), Resoluciones aprobadas en el XXXVI Congreso Federal.
- RAMIRO, L. (2004), *Cambio y adaptación en la izquierda. La evolución del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida (1986-2000)*, Madrid, CIS.
- RECIO, A. y, A. NAYA (2004), "Movimiento vecinal: claroscuros de una lucha necesaria", *Mientras tanto* 91-92: 63-82, Especial "25 años de movimientos sociales".

- REVILLA, M. (2004), "Las ONGD y la solidaridad internacional en España hoy. Campañas y movimientos", *Mientras tanto* 91-92: 63-82, Especial "25 años de movimientos sociales".
- SASTRE GARCÍA, C. (1997), "La transición política en España: una sociedad desmovilizada", *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, nº 80, pp. 33-68.
- TEZANOS, J.F. (1987), "El socialismo y los nuevos movimientos sociales", en A. Guerra, *et al.*, *Nuevos horizontes teóricos para el socialismo*, Madrid, Sistema.
- TORCAL, M., R. GUNTHER y J. R. MONTERO (2001), *Anti-party Sentiments in Southern Europe*, *Estudio/ Working Paper*, 2001/170, Madrid, CEACS, Instituto Juan March.
- VALCÁRCEL, A. (1997), "Entrevista a Joaquín Almunia", *Leviatán*, nº 69, pp. 5-34.
- WEBB, P. (2002), "Introduction: Political Parties in Advanced Industrial Democracies", en WEBB, P., FARRELL, D. y HOLLIDAY, I., *Political Parties in Advanced Industrial Democracies*, Oxford, Oxford University Press.
- YISHAI, Y. (2001), "Bringing Society Back in. Post-cartel Parties in Israel", *Party Politics*, nº 7 (6), pp. 667-687.

RECIBIDO: 13/12/2005
ACEPTADO: 5/10/2006